

APUNTES DE PLS

junio 2013

Publicado por Servicios Legales de los Presos
Ten Winthrop Square, Boston, MA 02110
Directora Ejecutiva: Leslie Walker
Redactor: Peter Costanza
Teléfono: 617.482.2773 WATS: 800.882.1413
Condado Prisionero Collect: 617.482.4124
Estado de Massachusetts Prisionero: *9004#
Llame los lunes 1-4 PM, las emergencias de
segregación 9-11 o 1-4 o escribir todos los días a
10 Winthrop Square, piso 3, Boston, MA 02110

Nuevo Proveedor de Servicios de Salud al DOC

El Departamento de Corrección ha otorgado su nuevo contrato de servicios de salud, cobertura de seguro médico, cuidado de la salud dental y mental, a la Massachusetts Alianza para el Correccional HealthCare LLC (MCPH). El nuevo contrato comienza el 1 de julio de 2013.

MPCH es una subsidiaria de Centurion, que es un negocio entre dos empresas privadas: Servicios Correccionales MHM, Inc., el proveedor actual de la salud mental para la DOC, y Centene Corporation, una compañía Fortune 500 que opera la administración de programas de atención médica o sea Medicaid en varios estados. En Massachusetts, Centene opera CeltiCare, un organización de cuidado administrado que proporciona seguro de salud para los inmigrantes legales que calificar para el programa Puente del estado. El contrato DOC parece marcar La primera incursión de Centene en la atención sanitaria de la prisión.

Esta transición afectará a todos los presos del DOC presos. Porque MHM ofrece actualmente DOC servicios de salud mental, la transición puede ser menos evidente, pero la atención médica, la salida de UMass Salud Correccional y la llegada of MPCH probablemente traerá cambios en el personal, la política y la práctica. Presos en busca de tratamiento deben estar preparado para recordar a los proveedores de sus necesidades (las pruebas, en las afueras consultas, etc.) con frecuencia, utilizando los resbalones de enfermo y procesos conciliatorios médicos, así como para no caer en el olvido. Eso aplica especialmente a los presos que tienen un fuera de consulta o procedimiento aprobado por UMass que no se llevan a cabo antes del cambio del proveedor el 1 de julio. No está claro si MPCH honrará los compromisos previamente realizadas, o va a someter a esas solicitudes de revisión adicionales.

También puede haber vacantes de personal durante la transición. Menos proveedores de la prisión puede significar más que el promedio espera de ser visto. Una vez más, los presos deben estar preparados para presentar nuevos resbalones enfermos, quejas médicas o asistir acceso del personal según sea necesario con el fin de visto de una manera oportuna.

PLS está dispuesto a escuchar cómo esta importante transición está progresando. DOC prisioneros con las necesidades serias de salud que no están siendo satisfechas pueden buscar la ayuda de PLS. Dependiendo de las necesidades y circunstancias de cada caso, PLS puede ser capaz de abogar en nombre de dichos presos o puede informar al detenido sobre cómo abogar para él, o ella, sí mismo.

Litigios HIV va al Juicio

Sumario

El 22 de mayo, el tribunal federal de Massachusetts escuchó argumentos en un caso que desafió un cambio en el método de distribuir los medicamentos HIV en el DOC. El recurso, presentado el favor de cinco presos contra UMass Salud Correccional, el Departamento de Corrección, y varios de sus funcionarios, reta a la decisión de los acusados a eliminar todos los medicamentos para el HIV del programa de mantener en persona (KOP).

El programa KOP permite a los presos calificados que mantengan sus medicinas en su celda, teniendo como prescrito, y la obtención de una recarga cuando sea necesario. Los presos que no tienen medicamentos KOP a tiempo, o que de otra prueba fiable con medicamentos KOP, puede ser suspendido o cancelado por el programa, lo que significa que tienen que asistir a una línea de medicina por cada dosis de su medicación, todos los días.

Los cinco demandantes habían tomado medicamentos KOP fiablemente durante años, con resultados positivos. Sin embargo, UMCH y el DOC los quitó del programa KOP independientemente de sus historias individuales. Mientras que primero sugirió que el cambio se hizo para mejorar la adherencia a la medicación, los acusados más tarde reconocieron que el cambio se hizo para ahorrar dinero. En ocasiones, cuando presos se mueven entre las prisiones, o son puestos en libertad DOC, los medicamentos se supone que se remitirá a ellos, pero a veces no lo son. Si bien los medicamentos KOP que quedan deben ser destruidos, medicamentos dispensados en la línea médico pueden ser reutilizado.

En nombre de los demandantes, PLS sostiene que esta acción fue discriminatoria en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, como la única medicamentos retirados del programa KOP eran HIV medicamentos. PLS también afirma que el cambio ha tenido efectos negativos en la salud de los demandantes (ya que pierden más dosis de la medicina ahora, y sufren más efectos secundarios, que lo hicieron bajo KOP) y privacidad (como asistencia todos los días en la línea de asistencia médico ha llevado a involuntario divulgaciones de su condición de HIV-positivo a otros).

Los acusados sostienen que forzar todos los pacientes con HIV para asistir línea médico ha tenido sólo efectos positivos en la salud de los pacientes, no se discrimina, ahorra una cantidad significativa de dinero, y no conduce a la no intencional violaciones de privacidad. Los demandados piden al tribunal que desestime el caso antes del juicio, los demandantes y PLS tienen oposición. Un fallo se espera para finales de este año.

03 de abril 2013

TESTIMONIO DE SERVICIOS LEGALES EN APOYO DE LA LEY DEL SENADO 1133:

Ley reduciendo los costos por colocación por atención médico extraordinario.

PLS proporcionó testimonio en apoyo de este proyecto de ley el 4 de abril de 2013. El testimonio, que es resume a continuación, se preparó por PLS directora Leslie Walker y PLS abogados Joel Thompson y Lizz Matos. Fue presentado al Comité Conjunto de Seguridad Público y Seguridad Nacional.

Este proyecto de ley (S. 1133) aborda colocación extraordinaria médica de presos de Massachusetts que tienen condiciones terminales, debilitantes o incapacitantes.

La población carcelaria incluye un pequeño número de hombres y mujeres que sufren de condiciones terminales, debilitantes o incapacitantes. Aunque no son muchos, dejan una huella grande. El cuidado de estas personas en el entorno penitenciario es difícil y caro. El tratamiento del preso y la asistencia a él o ella con las tareas diarias básicas consumen considerable tiempo del personal médico, dejando menos tiempo para otros pacientes. Estos prisioneros a menudo no pueden vivir en la población general y requieren enfermería específicas o demás vivienda, que es limitado. También consumen mucho tiempo de personal de seguridad, como oficiales deben transportarles a los hospitales y citas médicos.

La población carcelaria es también una población de mayor edad. En el Departamento de Corrección los presos mayores de 50 años de edad, que comprendieron el 13 por ciento de la población en 2002, ahora suman más de 20 por ciento de la población (cerca de 2,500 personas). Como de 2011, cerca de 600 presos DOC habían más de 60 años, y 163 tienen más de 70 años de edad. Es así conocido que los presos envejecieron con mayor rapidez y están más enfermos que la población en general. En prisión, 50 años de edad se considera anciano.

El reto de cuidar a enfermos y ancianos presos se magnifica por el hacinamiento en las prisiones de nuestro estado y en las cárceles del condado. A partir de diciembre 2012, tanto el Departamento de Comercio y las instalaciones del condado estaban operando a 140% de su diseño capacidad y la situación sólo es cada vez peor. Los funcionarios estatales prevén que el

Commonwealth necesitará construir separada, unidades de atención especializada a largo plazo para la enfermos crónicos y personas con discapacidad, lo suficiente para mantener más de 600 presos en 2020.

Este proyecto de ley representa un paso importante hacia la reconocer y hacer frente a estas realidades. Lo encarna un impulso humanitario que ha sido ausente para muchos años del sistema de justicia penal de la Commonwealth. Massachusetts debe unirse a los muchos estados que tienen una disposición para mover ciertos prisioneros fuera de la cárcel por razones médicas. Tal medida se ha recomendado en varias ocasiones lo largo de los años, el Consejo Asesor DOC (Sucesora de la Comisión Harshbarger) también lo hizo en 2005. Un asesor de atención médica a la DOC señaló en 2011 que al menos treinta otros estados han promulgado tales leyes médicos, y que Massachusetts fue una de las cinco estados que no tienen ningún programa para permitir la liberación de los presos que mueren. En su plan estratégico más reciente, el Departamento de Corrección aprobó el concepto de un ley que permite descarga médico.

A través de los años PLS se ha reunido con los clientes frente a terminal cáncer, otras enfermedades letales o con múltiples problemas médicos debilitantes. Su cuidado es difícil, no pueden tender a sí mismos, y son transportados en varias ocasiones de ida y vuelta entre la cárcel y fuera de hospitales. Tiene sentido para permitir las autoridades penitenciarias para emitir una descarga médica a estos prisioneros, donde no encuentran riesgo para la seguridad pública y son capaces de asegurar una colocación para el paciente en la comunidad. Colocación médica extraordinaria es una herramienta de que la comunidad debería aprovechar.

Demandantes Necesarios Para Caso Contra las Decisiones Retrasados de la Junta de Libertad Condiciona

PLS Jurídico está preparando un caso desafiando la manera en la cual la Junta de Libertad Condiciona lleva a cabo los procedimientos de revocación de la libertad condicional. Eso aplicará particularmente a las personas que desempeñan sentencias de condena perpetua del segundo grado (2d degree lifers). Es la posición de PLS que el procedimiento de la Junta de Libertad Condiciona causa retrasos ilegales por violar las regulaciones de Massachusetts relativa a revocaciones de libertad condicional y los derechos constitucionales de los lifers de segundo grado sujetos a ella.

El caso sólo busca el alivio declaratorio y mandato judicial, no el dinero daños y perjuicios. La meta es poner fin al procedimiento impropio y retrasado y a los efectos terribles que puede tener en los presos en espera de decisiones y a sus familias. PLS busca demandantes potenciales para este caso. También está siguiendo la línea de tiempo de La Junta de Libertad Condiciona respecto a las decisiones en casos individuo.

Por favor, póngase en contacto con abogado de PLS Jim Pingeon lo más pronto posible si usted es un "lifer" del segundo-grado y: (1) su libertad condicional ha sido revocado en los últimos seis meses o (2) usted está actualmente esperando una decisión definitiva de su revocación de libertad condicional del Consejo en pleno. Cuando póngase en contacto con nosotros, por favor, háganos saber la fecha de cada decisión y la información que usted ha recibido concierne a su revocación. y si Vd. ha ejercido su derecho a apelar la decisión de La Junta. Si usted ya no ha apelado, le sugerimos que usted apele de inmediato y incluya en su motivos escritos de la

apelación que el largo retraso en la emisión de su decisión de revocación violó tu derecho constitucional estado de Due Process y las regulaciones estatales aplicables. Las apelaciones deben ser presentada dentro de los 30 días de la fecha usted recibió la decisión por escrito. Usted tiene que apelar la decisión de Junta de Libertad Condiciona si usted desea ser elegible para su inclusión en el caso.

Demandantes Necesarios Para Caso que Desafió la Política Disciplinaria que Trata a los Teléfonos Celulares Como Herramientas de Escapar

El proceso disciplinario del DOC actualmente trata posesión de un teléfono celular como la posesión de herramientas de escapar o como evidencia del intento de fuga. Aunque es evidente que son contrabando, teléfonos celulares no tienen relación específica con cualquier actividad criminal en particular o para planes de escapar. Sin embargo, la política de castigo por los teléfonos celulares añade muchos puntos a la puntuación de clasificación de los presos afectados, y esos puntos esencialmente nunca desaparecen, condenándolos a la máxima seguridad o al menos, asegurando que nunca van a seguridad mínima independientemente del número de programas que completan o cuánto trabajan en la cárcel.

Si se enfrenta a acciones disciplinarias por posesión de un teléfono celular, o han sido reclasificado como resultado de puntos añadidos por una convicción de teléfono celular, y quiere desafiar esto, a PLS les gustaría saberlo. Por favor comprenda que cualquier acción legal que se lleva a cabo respecto a los castigos de teléfonos celulares intenta cambiar la política. No buscará daños monetarios. Envíe información a PLS abogado Lizz Matos.

Cambridge Cárcel Un Paso Más Cerca de Cierre

Las dos instituciones bajo el control del Sheriff del Condado de Middlesex han sido sujetos a órdenes de hacinamiento de muchos años. En 1989, en un caso llamado Richardson v. Sheriff del condado de Middlesex, el Corte Superior ordena al sheriff de no poner más de 200 prisioneros en la cárcel de Cambridge. También prohíbe que más de un hombre duerma en cada célula, y un número de otros requisitos. (PLS representa a los demandantes en Richardson.) En 1993, en un caso llamado Doyle v. Sheriff de Condado de Middlesex, restricciones similares fueron colocados en la Casa de Corrección de Billerica. Allí, el límite (después de las modificaciones al mandato judicial en 1998) se fijó en 835 presos, entre ellos un máximo de 50 detenidos antes del juicio.

El espacio físico disponible en Cambridge no ha aumentado desde que la medida cautelar publicado en 1989. Sin embargo, en los últimos años toda pretensión de cumplimiento con el orden limitando la población a 200 se ha evaporado, y la población allí alcanza muchos meses a 400. Hay literas en los pasillos, y colchones de barcos plásticos se han utilizado también. Además, la cárcel consiste en los pisos superiores de un edificio tan contaminada con asbesto que todas las otras oficinas estatales que alguna vez ocuparon sus pisos menores han salido desde hace mucho tiempo.

En 1998, el límite en Billerica era 865. Construcción considerable, y algunos demoliciones, se ha producido allí en los últimos 15 años, y la capacidad física de la HOC es ahora 1010, más que la población actual en esa instalación. Hay, sin embargo, problemas con el programa y otros espacios con función de apoyo en Billerica si se llena hasta su capacidad litera. Los casos Richardson y Doyle han sido consolidados con el fin de facilitar una solución integral al hacinamiento tanto en las instalaciones del condado de

Middlesex. La Tribunal Superior ha autorizado un límite de 1010 en Billerica y ha autorizado, de manera temporal, el movimiento de los detenidos de la cárcel de Cambridge a la HOC siempre que se mantienen separados de los condenados en todos los lugares, aparte de la HSU. El tribunal también ha aprobado un aumento de el límite en Cambridge de 230, aunque no hay un aumento en la capacidad física. El alguacil tiene que explicar a la corte exactamente donde se colocarán los carceleros 230; no permite a nadie estar sin una cama.

Mientras tanto, el estado y el alguacil de Middlesex han firmado contratos en parte de 37 millones de dólares para la construcción en Billerica, que está programado para la finalización en abril de 2014. Supuestamente, ese trabajo se añade suficientes camas y el espacio para programas para que Billerica acomoda a todos los detenidos en la cárcel de Cambridge y permitir su cierre.

Incluso si la construcción y transferencias de prisioneros asociado con resolver los problemas de Middlesex van bien, el resultado será otro ejercicio de la política cobardía que caracteriza a la política de sentencias en Massachusetts: \$ 37 millones para tratar de construir una salir de una crisis de población generados por sentencias que son demasiado largas, buen tiempo que es insuficiente, y la libertad condicional, que ahora rara vez se concede.

Escándalo en el Laboratorio de Probar Drogas Sigue Afectando a Casos Criminales Abiertos y Cerrados

El desorden creado por la mala conducta de Annie Dookhan, que era un químico del Laboratorio en Jamaica Plain que realiza las pruebas de drogas

por los procesos penales en la mayor parte del estado de Massachusetts, continúa.

Los acusados que actualmente enfrentan cargos sobre la base de evidencia probada en el laboratorio de drogas Jamaica Plain donde trabajó Dookhan deben hablar con sus abogados defensores acerca de cómo el mal manejo de las pruebas de drogas puede afectar a sus casos. Las personas que cumplen condenas por drogas en Barnstable, Bristol, Dukes, Essex, Middlesex, Nantucket, Norfolk, Plymouth, Suffolk pueden haber tenido su evidencia "probada" por Dookhan y debe buscar consejo legal.

Si ha sido condenado por un delito de drogas en cualquiera de esos condados y le gustaría tener su caso revisado para la asignación de abogado, llame a la Comisión de Servicios de Abogados Públicos (CPCS) en 617-482-6212 o 1-800-882-2095 y pedir hablar con la extensión para "drug lab cases." Presos de DOC pueden llamar CPCS en la siguiente con autorización previa de marcación rápida: *9009#. CPCS También puede ser contactado en 44 Bromfield St., Nº 2, Boston, MA 02108.

Iniciativas PLS Para 2013

PLS ha identificado varias áreas de preocupación para atención en 2013. Estos problemas pueden recibir una combinación de la atención a través de la defensa del cliente, defensa legislativa y litigios.

¡Alto al Solitario! PLS se centrará en la reducción de la el uso de la incomunicación en DOC e instituciones de los condados.

Alta médica. Este trabajo se centra en el desarrollo de un mecanismo para la pronta liberación de los presos que están gravemente enfermos o enfermos.

Sección 35 compromisos en MCI-Framingham. PLS seguirá trabajando con las organizaciones en una coalición que está explorando formas

para desafiar el confinamiento de la comprometida civil de las mujeres, sin el tratamiento adecuado, al MCI Framingham.

Agresiones del personal en ECCF (Essex HOC). La Essex HOC muestra hacia varios años un patrón de brutalidad frecuente contra los prisioneros bajo custodia allí. Cuestiones relacionadas son mal uso de sillas de sujeción y el K-9. PLS planea para hacer frente a estos problemas a través de litigios.

Clasificación de delincuentes sexuales y la libertad condicional. Actualmente el Departamento de Comercio se opone a todos los presos que son elegibles para compromiso SDP por parte de colocación en un mínimo de seguridad. Este clasificación de anulación obligatorio es incompatible con el estatuto que requiere que DOC evaluar si es probable que se asignen en virtud capítulo 123A. PLS se propone abordar esto en tribunal. El caso también se pondrá a prueba la interpretación de la Junta de Libertad Condicional del estatuto SDP que requiere seis meses de antelación al D.A. antes de que el preso puede ser liberado. La Junta de Libertad Condicional interpreta la ley a permitir retrasar aviso al D.A. hasta la libertad condicional se concede en realidad en lugar de los seis meses antes de la fecha de elegibilidad de libertad condicional. En los muchos casos en que la junta de libertad condicional nunca aprueba el preso, él o ella no pueda alcanzar por debajo de mediana seguridad durante su sentencia y, en consecuencia, pierde oportunidades de programación, incluyendo el trabajo en la comunidad, que son ayudas importantes para la reentrada.

La discriminación contra los usuarios de sillas de ruedas en custodia DOC. PLS está mirando a las prácticas de clasificar a los usuarios de sillas de ruedas a la enfermería debido a la escasez de las células para discapacitados, en el escasez crónica de empujadores de sillas de ruedas, y dificultades de acceso y la calidad de sillas de ruedas. PLS está buscando a los presos que se han asignado a HSU debido a una escasez de células para

discapacitados, que necesitan empujadores pero no los tienen por períodos sustanciales, o que han sido asignados las sillas de ruedas que se rompen, que carecen de reposapiés, y que no han podido acceder a la programas y recreación debido a defectos en la sillas de ruedas o la falta de los empujadores. Según circunstancias individuales, los presos con estos problemas de accesibilidad pueden ser adecuados demandantes en el litigio destinadas a mejorar el acceso a las células para discapacitados, programas de la prisión, y sillas de ruedas adecuadas. Los presos con preguntas de silla de ruedas deben ponerse en contacto con PLS abogado Joel Thompson o paralegal Al Troisi.

Los prisioneros detenidos ilegalmente por los órdenes de detención de inmigración. ICE muchas veces coloca los órdenes de detención de los presos justo antes o en el momento de su lanzamiento programado. El ICE retención tiene una validez de sólo 48 horas, pero muchos prisiones y cárceles tienen habitualmente las personas para semanas o meses en órdenes de detención de inmigración.

Informe Critica Fuertemente a la Política de Justicia Penal de Massachusetts

En marzo, el Massachusetts Coalición por Justicia Penal (MCJC) presentó un informe de 40 páginas en Massachusetts política de sentencia, correcciones y libertad condicional. El informe, titulado "Crímen, Costos y Consecuencias: ¿Es hora de convertirse en Inteligente sobre la delincuencia?" fue escrito y by MassInc y Recursos de la Comunidad por la Justicia.

El MCJC contiene expertos con amplia experiencia en la justicia criminal, incluyendo los fiscales y los funcionarios de prisiones, de abogados de defensa, organizadores comunitarios y de personas de negocios que comparten una

preocupación de que el mancomunidad tiene que cambiar su sistema de justicia criminal. La preocupación es mayor por el conocimiento de que estos funciones del gobierno actualmente le cuestan a los contribuyentes \$ 1,200,000,000 anualmente por encarcelamiento por sí solos. Por otra parte, Massachusetts está detrás de otros estados en la adopción de las reformas que se muestran efectivos para reducir los costes y mejorar la seguridad pública.

El hecho es que los índices de criminalidad están bajando nacionalmente y en Massachusetts. Mientras que otros estados han cerrado prisiones en respuesta a esta caída, Massachusetts continúa construirlos, porque una mayor pena y la disminución de tasas de libertad condicional tienen más que compensado por la disminución de actos criminales reales y convicciones.

A medida que la recesión de cinco años continúa, Massachusetts presupuestos correcciones son apretando la financiación de la salud pública, el aumento de la educación y la ayuda local.

"Este nuevo informe analiza los modelos desarrollados en otros lugares, incluyendo en muchos "estados rojos" que han detenido la construcción de prisiones, la reducción de sentencias obligatorias, y ha invertido en programas basados en la evidencia para reducir costes y incrementar la seguridad pública. En lugar de gastar más en lo que no funciona, estados como Arkansas, Georgia, Carolina del Sur y Texas están gastando menos en lo que hace."

Reflejos

El informe identifica cuatro "factores de coste" resultante de Massachusetts políticas actuales de sentencia. En primer lugar, es un estimado de \$150 millones de dólares anuales para mantener

presos encarcelados alrededor de un tercio más largo que era el caso en 1990. En segundo lugar, la reducción del número de presos que cumplen condenas de drogas para 1985 niveles ahorrará \$90 millones al año. En tercer lugar, el costo estimado de la clasificación demasiado alto - crecimiento de ocho hasta dieciocho por ciento de prisioneros de máxima seguridad de 1990 a 2012, corre hasta un adicional de \$16 millones anualmente.

En cuarto lugar, "[e]l costo de la elevada repetición infractor como resultado de la liberación sin supervisión y la programación de reentrada inadecuada. Si Massachusetts podría reducir el número de reincidentes por sólo el 5 por ciento, se generarían hasta \$ 150 millones en ahorros anuales. Nuevos datos del cohorte versión 2005 revelan que alrededor del 60 por ciento de los reclusos saliendo de las prisiones del estado y una fracción similar de los dejando las instalaciones del condado son condenados en cargos nuevos dentro de seis años de libertad. En el año fiscal 2011, casi dos tercios de los delincuentes de drogas y casi el 60 por ciento de los delincuentes de sentencias no por drogas reciben sentencias con el mínimo y máxima fueron muy similares. Esta estructura de sentencia limita la libertad condicional y reduce los incentivos que tienen los delincuentes para tomar medidas para rehabilitarse mientras estaba en prisión. También, más delincuentes vuelven a la comunidad sin supervisión. En 2011, casi la mitad de presos liberados a la calle de las prisiones del DOC no recibieron ningún tipo de supervisión."

Los ex - prisioneros ganan un promedio de 40% menos por su trabajo respecto a las personas que no han ido a la cárcel (una estimación nacional). Eso significa que trabajadores en Massachusetts pierden 760 millones dólares

anual de los salarios, y que el Estado es privado de los ingresos fiscales que tendría generada por los salarios perdidos.

"El encarcelamiento también tiene importantes implicaciones para las comunidades que de manera desproporcionada soportar la carga de envío y recepción de delincuentes. A sólo 10 ciudades de Massachusetts, que representan sólo una cuarta parte de la población del estado, sufrió más de la mitad de todos los delito violento cometido en el Commonwealth en 2010. Homicidios, que causa la agitación social peor, eran aún más altamente concentrado, con más de dos tercios de todos los asesinatos en el estado ocurriendo en estas 10 comunidades. Del mismo modo, 10 comunidades recibieron la mitad de los presos DOC lanzado a la calle en 2011. "

El informe concluye que si Massachusetts continúa en la ruta de adopción de las sentencias de venganza guiado por la política de libertad condicional que se ha llevado a cabo durante los últimos treinta años (ejemplificada por la adopción en 2012 de la legislación de "tres huelgas "), el estado va a gastar más que 2000 millones dólares durante la próxima década implementando políticas de sentencia y la prisión que producen pocos beneficios de seguridad pública demostrable.

Recomendaciones

1. Coloque una moratoria a la expansión de cárceles estatales y municipales;
2. Empoderar a la Comisión de Sentencias de revisar el planteamiento del estado a la sentencia y sanciones;
3. Delimitar claramente la responsabilidad de todos después de la liberación por la supervisión de los delincuentes

4. Ampliar el uso de la supervisión de la comunidad y le programación pre-lanzamiento;

5. Hacer del Programa Reingreso de Emergencia de Boston un modelo para los centros urbanos de todo el estado;

6. Completar un amplio estudio de las condiciones del confinamiento, la programación, y la calidad de programas por todas partes del estado;

7. Estandarizar los sistemas de datos y los protocolos por presentación de informes, y enviar la información a un centro de investigación;

8. Entender cómo el sistema correccional del estado puede orientarse hacia la justicia reinversión en justicia, y desarrollar una estrategia para construir una cultura basada en datos de toma de decisiones con las agencias.

=====

PLS ahora tiene un página Facebook:

www.facebook.com/prisonerslegalservices.

PLS también tiene una página de Twitter:

<https://twitter.com/plsma>.

=====

Prisoners' Legal Services
Ten Winthrop Square, 3d Floor
Boston, MA 02110

Non-Profit Organization
U.S. Postage Paid
Boston, MA
Permit No. 58866

**PLS' phone numbers are: *9004# for DOC
prisoners and (617) 482-4124 (collect) for county
prisoners. The regular business number is (617) 482-
2773**